

Movimientos campesinos emergentes en México. Las organizaciones campesinas productoras de granos básicos 1995

Ana de Ita¹

Septiembre 1995

El texto muestra como se inicia un nuevo ciclo de movilizaciones campesinas entre los productores excedentarios de granos básicos, de buena productividad, del Noroeste y el Bajío -inmersos en mayor grado en la economía mercantil-, y los campesinos deficitarios dedicados a procesos de abasto organizado en el Sur y Sureste, a partir de 1995. Ambos cuestionan el modelo económico y se movilizan para seguir siendo productores del campo. En el sexenio pasado enfrentaron el impacto de la apertura comercial, la eliminación de precios de garantía y la reducción drástica de subsidios que socavaron la rentabilidad de la producción. Estas nuevas movilizaciones constatan el fracaso del corporativismo salinista que busca crear un "Nuevo Movimiento Campesino" retomando posiciones de los movimientos campesinos autónomos, ahora desde arriba, para avalar las contrarreformas, nocivas para los campesinos a todas luces

A partir de la ruptura del pacto social provocada por la reforma al Artículo 27 constitucional, el gobierno salinista buscó institucionalizar una nueva forma de relación corporativa entre el Estado y la dirigencia campesina que le permitiera contar con un sustento social de respaldo a la modernización² del campo impulsada desde arriba. Bajo el nombre oficial de Nuevo Movimiento Campesino la corriente modernizadora de la Confederación Nacional Campesina (CNC), funcionó como el principal aval de las reformas al campo. El Nuevo Movimiento Campesino retomaba algunas banderas y posiciones de los movimientos campesinos autónomos que desde principios de la década de los ochenta habían buscado cambiar de terreno organizativo: de la lucha por la tierra, a la lucha por la apropiación del proceso

¹ Este trabajo es un producto del acercamiento al proceso de construcción de este movimiento y de la información verbal y documental que sus protagonistas generosamente compartieron conmigo. Benjamín Valenzuela, Pedro Magaña, Víctor Suárez, Isabel Cruz, Alfonso Valenzuela, Eduardo Durán y Hector Armenta aportaron su experiencia directa y sus valiosos puntos de vista. Varias de las ideas aquí vertidas reflejan una serie de discusiones formales e informales con Luis Hernández, Luis Meneses, Erasmo Calleros, Víctor Suárez y Ramón Vera. La responsabilidad final es mía pues seguramente habrá otras lecturas del mismo proceso.

² Utilizo el concepto modernización como la acción que promueve el aumento de la participación de relaciones mercantiles. En torno a ella se llevó a cabo en México la reforma al artículo 27 Constitucional y el grueso de reformas económicas orientadas a la liberalización de la agricultura.

productivo. Esta corriente consideraba la apropiación del proceso productivo como un instrumento para controlar una mayor porción del excedente económico generado en la producción y como un mecanismo para fortalecer la participación democrática y la distribución del poder político³. En el modelo de economía abierta —resultado de las políticas neoliberales— esta estrategia organizativa, resultó inviable y redujo el margen de acción y la fuerza política de las organizaciones campesinas⁴. Sin protección ni regulaciones estatales perdieron fuerza económica, a la par que no pudieron incidir en el diseño y orientación de las políticas públicas.

El nuevo Artículo 27 abría la puerta a la reconcentración de la tierra a partir de las sociedades mercantiles; la liberalización agrícola colocaba a los productores campesinos frente a la competencia de mercado con grandes empresas privadas nacionales y transnacionales mientras el Estado se deshacía de su responsabilidad como rector y regulador económico; los acuerdos comerciales internacionales, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas Aduaneras (GATT), definían el marco de la política económica y agrícola en el largo plazo. La rebelión campesina e indígena en Chiapas, a principios de 1994, fue la expresión más fuerte de los límites de la modernización del campo impulsada desde arriba.

Un nuevo ciclo de movilizaciones campesinas: los productores de granos básicos

Los campesinos excedentarios, productores de granos básicos, localizados principalmente en zonas de alta productividad como el Noroeste y el Bajío e inmersos en mayor grado en la economía mercantil, y los campesinos deficitarios dedicados a procesos de abasto organizado en el Sur y Sureste, a partir de 1995 cuestionan también el modelo económico y se movilizan para seguir siendo productores del campo.

³ Véase Gordillo Gustavo, *Campesinos al asalto del cielo. De la expropiación estatal a la apropiación campesina*, México, Siglo XXI, 1988

⁴ Rebase el propósito de este trabajo analizar la viabilidad de la estrategia de apropiación del proceso productivo en el contexto de liberalización de la agricultura y existe un número amplio de trabajos que lo abordan. Al respecto véase los trabajos coordinados por Julio Moguel, Carlota Botey y Luis Hernández, *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, México, Siglo XXI, 1992.

A lo largo del sexenio pasado enfrentaron el impacto de la política económica: apertura comercial, eliminación de precios de garantía y reducción drástica de subsidios se combinaron para socavar la rentabilidad de la producción.

La crisis de la economía mexicana a finales de diciembre marcó el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones campesinas. La devaluación y los programas de emergencia económica —de corte ortodoxo neoliberal- trastocaron de inmediato la frágil estabilidad de la economía campesina comercial al impactar los ciclos de cosecha y siembra de los productores.

Las organizaciones campesinas despertaron del marasmo en que las había sumido la serie vertiginosa de cambios a los que habían tratado inútilmente de dar respuesta.

Después de cuatro años de inmovilidad los campesinos productores de granos básicos y oleaginosas —maíz, frijol, trigo, sorgo y soya— han protagonizado uno de los movimientos rurales más importantes.

La lucha por el aumento de los precios de garantía de los granos básicos ha sido tradicionalmente un eje de la movilización campesina. Entre 1983 y 1987 las movilizaciones que llevaron a cabo los productores de Chihuahua, Nayarit y Chiapas dieron un importante impulso al movimiento campesino autónomo y culminaron con la constitución de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) en 1985.

El último ciclo de movilizaciones campesinas en torno a los granos básicos, fue protagonizada durante 1990 por los productores de sorgo, soya y trigo. Las importaciones provenientes de Estados Unidos a menores precios que los precios de concertación internos, y apoyadas por mecanismos de financiamiento (CCC⁵) a tasas subsidiadas que las convertían en un verdadero negocio para los industriales, significaron una competencia desleal para estos productores. Las organizaciones de UNORCA del Noroeste y el Bajío empujaron una gran marcha nacional y convergieron en Querétaro, mientras organizaciones de Chiapas, Hidalgo y Veracruz, que demandaban solución a sus problemas agrarios, se unían al movimiento en la Ciudad de México. La marcha de miles les valió el reconocimiento de la sociedad y la amenaza del gobierno si llegaban a la capital. Este ciclo anterior de movilizaciones se

⁵ Commodity Credit Corporation

cerró con el movimiento de los productores de sorgo del Bajío, quienes en demanda de respeto al precio de concertación para el sorgo tomaron instituciones, granjas y empresas transnacionales productoras de alimentos balanceados, en tanto que los dirigentes de la Alianza Campesina del Noroeste de Sinaloa, realizaron una huelga de hambre hasta obtener un subsidio para la producción del soya. La política de concertación del Estado se evidenció entonces como un sutil y eficaz mecanismo de control del descontento campesino.

Después de este movimiento las organizaciones campesinas trataron de oponerse a la orientación de la política agrícola con propuestas y acciones aisladas. La falta de acuerdos y coordinación les impidió aglutinar la fuerza necesaria para movilizarse.

Construyendo las propuestas y los vínculos desde abajo

Diferentes agrupaciones campesinas se reunieron en las regiones para analizar el impacto de la crisis económica en la situación de los productores de granos ante la proximidad de la cosecha del ciclo otoño-invierno de maíz y trigo. Paulatinamente las propuestas de política y acción fueron tomando forma, a la par que las organizaciones fortalecían sus vínculos orgánicos.

1. La Red Estatal de Organizaciones de Productores de Maíz del Estado de Guerrero⁶ convocó a un taller de análisis sobre el impacto de la crisis y la devaluación en los ingresos de los productores maiceros de temporal y la política de precios y subsidios recién anunciada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGRD)⁷. Uno de los objetivos era “..promover un foro de organizaciones maiceras a nivel nacional con otras organizaciones del país.”⁸

La producción de granos básicos se vería afectada por el impacto de la devaluación en el aumento de los costos de producción —aumento en las tasas de interés, en los precios de los insumos agrícolas (fertilizantes, plaguicidas y semillas)— y por la escasez de crédito. Era necesaria una política de fomento que revalorara la

⁶ La red de organizaciones maiceras de Guerrero se formó en 1991 a partir de un proceso de convergencia estatal y nacional de organizaciones productoras de maíz que buscaron dar respuestas coordinadas a las políticas públicas y avanzar en la comercialización organizada de su producción.

⁷ La jornada, 10 de enero de 1995, citado por Bartra Armando, en: "Un Procampo devaluado", en Red de Productores de Maíz del estado de Guerrero, *Memorias del taller de análisis sobre la problemática del maíz en Guerrero y las políticas públicas de las instituciones de apoyo*, Chilpancingo, Gro. 21 y 22 de enero de 1995.

importancia estratégica de la producción de granos básicos y oleaginosas y garantizara los alimentos que demanda el país.

Después de la devaluación los precios internacionales de los productos básicos son más altos que los precios domésticos, pero los productores no podrían aprovechar esta tendencia al alza para compensar en alguna medida el aumento de los costos de producción, pues al no controlar la oferta y comercialización de los productos estarían sujetos a los precios de concertación o garantía que fija el Estado⁹. "...la SAGDR informó que el gobierno no absorbería ni compensaría las alzas en los precios de los insumos de exportación lo que justificó incrementos en los precios de hasta 40%. En tanto a los productores maiceros se les anunció un ridículo aumento nominal de la cuota de Procampo que equivale al 5 y 10%. Además se les informó que no se incrementaría el precio nominal de sus cosechas..."¹⁰ El Estado eliminó también el subsidio implícito en el precio de garantía para el maíz.¹¹

2. En el noroeste, ocho organizaciones de productores y empresas comercializadoras de trigo, con mayor experiencia organizativa y de construcción económica, que representan a productores privados y a productores sociales miembros de la UNORCA y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) llamaron a una reunión el 27 de enero, en Sinaloa, para desarrollar una estrategia comercial para la próxima cosecha. Asistieron 40 agrupaciones de varios estados, formaron un Consejo Nacional de Empresas Comercializadoras de Trigo y cuatro empresas comercializadoras de Sinaloa se integraron en el Grupo de Sociedades de Uniones de Crédito del Río Ehora (SUCRE). Esperaban que los precios más altos del trigo en el mercado internacional y el cambio de paridad del peso, permitiría mejores precios internos.

3. El 28 de febrero la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) realizó una asamblea nacional En Defensa del Financiamiento Rural, en la que participaron 29 uniones de crédito del sector social de quince estados del país y

⁸ Red de Productores de Maíz del estado de Guerrero, *ibid*.

⁹ Suárez Victor, "La comercialización del maíz, su futuro y el papel de Boruconsa", y Bartra Armando, "Un Procampo devaluado", en: Red de Productores de Maíz del estado de Guerrero, *ibid*.

¹⁰ Bartra Armando, *ibid*.

¹¹ Véase Bartra Armando, *ibid*. El precio de 600 nuevos pesos la tonelada para el ciclo P/V 94 antes de la devaluación contenía parte del subsidio, pues compensaba con 150 pesos por tonelada el diferencial del precio doméstico con el precio del maíz importado puesto en México (precio de indiferencia) que era de 450 nuevos pesos. Después de la devaluación el precio de indiferencia iguala o supera al precio de garantía interno, por lo que en el precio de garantía del maíz ya no existe subsidio.

otras organizaciones de productores. A raíz de la crisis, la política monetaria restrictiva se profundizó y el Estado optó por aumentar fuertemente las tasas de interés (incrementos de hasta un 300%) como mecanismo para captar ahorro. Para las uniones de crédito y sus socios estas medidas las colocaban frente a una eminente caída en cartera vencida lo que disparó la respuesta campesina. No era posible atacar los problemas financieros sin atender las causas estructurales de falta de rentabilidad de la producción primaria que los provocan. A esta reunión asistieron también representantes del Barzón de Zacatecas. Los Barzonistas demandaban a las uniones de crédito moratoria en el pago de los créditos de sus socios; sin embargo llegaron al acuerdo de luchar juntos por un tratamiento unitario de la cartera vencida y por un sistema distinto de financiamiento rural. Propusieron políticas inmediatas para el financiamiento agropecuario¹² y acordaron utilizar la movilización para impulsarlas.

4. En Jalisco cinco organizaciones de productores sociales afiliados a la CNC y a la Central Campesina Independiente (CCI) y de pequeños productores privados integrantes de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) y el Barzón, hicieron un llamado a la unidad el 17 de marzo para impulsar un movimiento social amplio, que hiciera valer la voz de los campesinos ante las indefiniciones de la política agrícola. A esta reunión asistieron 185 representantes del estado de Jalisco y 30 más procedentes de diez estados de la República. Las bases campesinas habían exigido a sus respectivas dirigencias usar la movilización como mecanismo para obtener respuestas a sus demandas de una política de precios justa para el trigo, el maíz y el sorgo; una política de precios para los insumos productivos que permita la rentabilidad del sector y la operación ágil y oportuna de Procampo. Se proponían modificar la política agrícola que les había golpeado durante el sexenio anterior, a partir de la organización social y la acción unitaria. Reivindicaban la soberanía alimentaria y la existencia de un campo con campesinos. Solicitaron audiencia con el Secretario de Agricultura y acordaron movilizarse si no encontraban respuesta a partir del 17 de abril.

Algunos grupos organizados en Chiapas, Guerrero y el Estado de México habían iniciado movilizaciones demandando aumentos en los precios y subsidios,

¹² AMUCSS, Propuesta de financiamiento rural para la reactivación del sector agropecuario, mecanoescrito, México, enero de 1995.

financiamiento para la compra de fertilizantes y entrega anticipada del Procampo. Bloquearon carreteras, realizaron plantones en las capitales estatales o tomaron bodegas de la Conasupo pero no obtuvieron respuestas sustanciales y en algunos casos como en Chiapas y Guerrero fueron reprimidos con violencia.

El 24 de abril se realizó un primer intento de coordinación de las distintas iniciativas; ocho agrupaciones regionales y nacionales¹³, entre las que figuraban varias de las que habían impulsado las coordinaciones regionales citaron a las organizaciones económicas de productores del campo a la reunión, Por una Política Justa para los Productores del Campo, en la Ciudad de México. En ella definieron propuestas y acciones conjuntas para impulsarlas.

Asistieron más de 300 representantes de 120 organizaciones económicas de 20 estados del país¹⁴. La coordinación no fue fácil, pesaron las diferencias en cuanto a la autonomía del movimiento. En el grupo de organizaciones convocantes existía una tensión entre organizaciones vinculadas a la CNC, interesadas en mantener los tradicionales mecanismos de control y pertenencia y en evitar el surgimiento de un nuevo sujeto social que disputara bases y espacio político y las organizaciones que apostaban y creían necesaria una construcción autónoma en defensa de los intereses gremiales de los productores de granos básicos. Las posiciones de las organizaciones regionales al poner por delante los intereses de los productores legitimaron la autonomía del movimiento frente a las instituciones, centrales o partidos.

Convocaron a las organizaciones económicas¹⁵ para marcar su independencia de filiaciones políticas y crear un espacio de autonomía, pero buscaron el diálogo y convergencia con todas las organizaciones sociales del Congreso Agrario Permanente.

Bajo el nombre de Movimiento Nacional de Organizaciones Económicas Campesinas, entregaron sus demandas y propuestas de política a los gobernadores de los estados, a los secretarios de gobierno y al presidente. El resolutivo más

¹³ La AMUCSS, la Asociación Nacional de Distribuidores de Fertilizantes e Insumos del Sector Social (ANDFIASS), la Comercializadora Estatal Campesina del Estado de Guanajuato (CECEG), la Comercializadora Agropecuaria de Occidente (COMAGRO), el Consejo Nacional de Empresas Campesinas (CNEC), el Consejo Nacional de Empresas Comercializadoras de Trigo, la Red Estatal de Organizaciones Maiceras de Guerrero y la Empresa Integradora de Puebla.

¹⁴ Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Colima, Querétaro, Estado de México, Puebla, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca Tamaulipas, Zacatecas, Morelos y Sonora.

¹⁵ Participaron uniones de crédito, empresas campesinas comercializadoras y de abasto, empresas distribuidoras de fertilizantes, fondos de autoaseguro y organizaciones de productores de todos los niveles.

importante fue la coordinación de una jornada nacional de movilizaciones: Por una Política Justa para los Productores del Campo.

La movilización coordinada representa una ruptura en la relación del movimiento campesino con el Estado y en sus estrategias de organización. La tradición de movilización campesina como forma de impulsar sus demandas había sido cuestionada por el Estado y por las propias organizaciones durante los últimos años. Las organizaciones, incluso algunas de las más combativas, dejaron de lado la movilización para *cambiar del terreno* de las demandas (peticionismo) al de las propuestas¹⁶. Este intento llevó un largo aprendizaje para las organizaciones y fue costado con sus propios recursos. Las organizaciones se especializaron en el diseño de propuestas de política, que no fueron escuchadas. La falta de respuesta a las demandas campesinas y la inmovilidad como consigna redujeron cada vez más el margen de maniobra de las organizaciones y su peso social, cuestionaron a importantes líderes regionales y en la mayoría de los casos provocaron un debilitamiento de los vínculos organizativos.

En el resurgimiento de las movilizaciones sociales de este año influyeron al menos cuatro factores:

1. La crisis económica sin políticas de amortiguamiento fue un factor determinante. Si bien los productores de granos básicos habían sufrido la caída de la rentabilidad agrícola desde el sexenio pasado, el maíz con precio de garantía relativamente más alto que los restantes cultivos, permiso previo de importación y programas estatales de fomento a la comercialización directa había servido como refugio a un buen número de productores comerciales.

A partir del ciclo otoño-invierno de 1993, los recursos de Procampo habían proporcionado a los productores cierta liquidez y aminorado en alguna medida los efectos negativos de la apertura en el trigo, sorgo y soya. La crisis y la devaluación repercutieron de inmediato en el aumento de los costos de producción y los productores no obtuvieron compensaciones ni encontraron alternativas en los pactos de emergencia económica y en las medidas de política agrícola. La proximidad de la cosecha de los ciclos otoño-invierno de maíz y trigo, y la necesidad de insumos y

¹⁶ Una excepción fue la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, (cnoc) que ha mantenido como estrategia exitosa la combinación de propuestas de política con movilizaciones amplias para impulsarlas.

financiamiento para preparar la siembra fueron un detonador de la movilización campesina.

2. La erosión de la legitimidad del modelo neoliberal. La crisis mexicana demostró la fragilidad del modelo económico impulsado y canceló las expectativas de los beneficios anunciados una vez que se lograra consolidar la estabilidad y el crecimiento económico. La erosión de la legitimidad de este modelo se dio en proporción directa a la crisis. Durante el sexenio pasado las críticas al modelo neoliberal eran descartadas al calificarse de premodernas y utópicas. Las voces de los campesinos que demandaban una política de protección y fomento a la agricultura para ser oídas tenían que remontar esta corriente ideológica dominante, Ahora han cobrado nueva vigencia.

3. El comportamiento del mercado agrícola internacional como justificación de las demandas de los productores. La constante reducción de los precios de los granos básicos y las políticas de liberalización fueron justificadas durante el sexenio pasado por la necesidad de equiparar los precios internos a los internacionales. La devaluación proporciona una protección coyuntural a la producción nacional al elevar el costo en pesos de los productos en el mercado internacional. Los productores, utilizando el mismo discurso de *razón de mercado* que les ha sido impuesto, exigen los beneficios relativos que ahora éste les otorga ya que siempre han pagado sus costos.

4. Los pocos instrumentos del Estado en apoyo a los productores fueron utilizados en su contra, los subsidios de Procampo, la fijación de precios a través de la compra por Conasupo y los períodos de protección acordados en el TLC, se aplicaron para eliminar las pobres ventajas a que los productores tenían derecho. La movilización no excluía otras alternativas ya que éstas no existían.

Desde las movilizaciones regionales a la convergencia nacional

Mayo inició con varios brotes de movilización en el campo, organizadas por vertientes del movimiento distintas, a veces antagónicas o espontáneas, que confluyeron al impulsar demandas similares y aumentaron su fuerza.

Las agrupaciones integrantes del Movimiento de Organizaciones Económicas se movilizaron en las regiones y confluyeron con otras iniciativas. El 17 de Mayo en Jalisco, Nayarit y Puebla estas organizaciones hicieron del conocimiento público sus propuestas. Alrededor de 600 campesinos en cada estado marcharon a las delegaciones de agricultura para demandar políticas alternativas para los productores de granos básicos. En Jalisco esta acción aglutinó a productores sociales y privados. En Nayarit los productores ejidales se entrevistaron con el delegado de agricultura y el gobernador, quien aceptó hacer llegar al Presidente sus demandas. En Puebla la movilización de las organizaciones logró una reunión con el Gabinete Agropecuario del estado que les dio respuestas parciales. Los aspectos medulares de sus demandas no se resolverían en el ámbito estatal.

Los movimientos de Guanajuato, Sonora y Sinaloa fueron particularmente significativos, potenciados por la participación de dirigentes con experiencia en las movilizaciones de los años anteriores.

En Guanajuato la movilización estuvo permeada por la campaña electoral para gobernador. Para fortalecer la campaña priísta, la CNC impulsó las tomas de carreteras y plantones de los trigueros. Después de algunas horas la dirigencia decidió levantar los plantones pero sus bases no lo admitieron. Tomaron la Secretaría de Agricultura, apoyados por los dirigentes regionales de la CCI, la Comisión Coordinadora de la Unidad Campesina (CODUC), la UNORCA, y de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad, que también incorporaron sus bases al movimiento.

Después de 15 días de movilización permanente, dos reuniones con el Secretario de Agricultura y varias con otros funcionarios, el Gobernador panista firmó un convenio con las organizaciones campesinas para subsidiar con 50 pesos por tonelada el precio del trigo. Fue acusado por el dirigente cenecista de aprovechar la movilización en favor de su partido. Los productores de Guanajuato lograron el precio de trigo más alto de la temporada.

En Guanajuato el movimiento de los sorgueros en 1990 había enseñado a los dirigentes la importancia de controlar sus cosechas durante el movimiento. Uno de los primeros resultados de sus acciones fue el acuerdo para levantar y resguardar su producto en las bodegas públicas y de particulares sin perder su propiedad. Una vez

acordado el precio base estatal, los campesinos de Guanajuato defendieron sus negociaciones concretas.

En Sonora el movimiento tuvo una gran presencia de los agricultores privados, además de las organizaciones ejidales integrantes de la CNC, de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano) y de la UNORCA. A partir del 13 de mayo, se plantaron con maquinaria agrícola a la orilla de la carretera en Ciudad Obregón. Este plantón se mantuvo mayo y junio. Tomaron la Secretaría de Hacienda de Ciudad Obregón. Al calor del movimiento abrieron mesas de negociación con funcionarios menores y formaron una comisión negociadora que representa a las distintas organizaciones participantes.

En Sinaloa, el primero de Mayo, las organizaciones campesinas y de productores marcharon independientes de los partidos políticos en demanda de rentabilidad para el campo. A partir del 8 de mayo organizaciones sociales integrantes de la UNORCA y la CIOAC, y organizaciones de productores privados asociados en uniones de crédito y asociaciones de usuarios de los distritos de riego iniciaron la coordinación del movimiento bajo el nombre de Sectores Productivos en Acción.

Mantuvieron un plantón permanente de 2 500 personas y 200 tractores durante 51 días en la explanada de gobierno de Culiacán. Paulatinamente incorporaron un mayor número de organizaciones estatales que aumentaron su fuerza y representación, realizaron acciones espectaculares que involucraban a la población en general y recibieron la solidaridad de algunas cámaras de comercio, del Congreso del Estado y del gobernador. Vincularon las demandas de un cambio en el modelo agropecuario con las de los productores individuales. Establecieron mesas de negociación con las instituciones y fueron recibidos varias veces por el Secretario de Agricultura y funcionarios de Hacienda, pero no obtuvieron solución a sus problemas fundamentales de falta de rentabilidad de la agricultura.

El movimiento sinaloense, bajo el nombre de Sectores Productivos en Acción convocó a todas las organizaciones que participaron en los movimientos regionales a una reunión nacional el 11 de julio, en la Ciudad de México, para formar un frente nacional por un cambio de modelo agropecuario. Obtuvo una amplia respuesta de 97 organizaciones regionales de 19 estados y de organizaciones nacionales como AMUCSS y ANDFIASS, además de organizaciones nacionales como Alcano, UNORCA, CIOAC y la

Unión General Obrero Campesino y Popular (UGOCP), integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP). Los liderazgos regionales fueron reconocidos nacionalmente. Los dirigentes nacionales cedieron su lugar a los dirigentes regionales que ahora cumplían un papel nacional. Un acuerdo construido desde arriba, por las dirigencias nacionales hubiera sido impensable. En las regiones las organizaciones probaron su fuerza y construyeron durante el movimiento los acuerdos básicos que sus organizaciones nacionales debieron avalar al menos de forma indirecta. La emergencia de nuevos liderazgos y su expansión en todas las regiones hacía poco posible controlar el movimiento al estar soportado en múltiples dirigentes.

Acordaron constituir el Frente Nacional de Sectores Productivos en Acción para impulsar de manera autónoma los intereses gremiales de los productores e influir en las decisiones de política pública. El período de movilizaciones álgidas, vinculadas a la siembra y a la cosecha había pasado, era urgente fortalecer la coordinación para actuar en el próximo ciclo. Rescatando una de las enseñanzas de la movilización acordaron consolidar su capacidad de control de la oferta como una herramienta para insertarse en los mercados. El movimiento se planteó combinar estos dos ejes de acción.

En el sistema corporativo mexicano el surgimiento de cada movimiento organizativo disputa un espacio político y puede fracturar las articulaciones que lo mantienen. Tres elementos al menos pueden ayudar a explicar por qué fue posible el avance de los productores de granos.

1. Los aparatos de control político del Estado, principalmente el PRI y la CNC se han debilitado en proporción directa a la crisis, al no tener capacidad para ofrecer beneficios relativos a sus bases. Los productores han aprendido a separar sus intereses económicos de su filiación política electoral. Las movilizaciones de Guanajuato y Jalisco demuestran el debilitamiento de los mecanismos de control corporativo, en estados del país en que el PRI no gobierna. Las bases sociales cenecistas en los dos casos se negaron a obedecer el llamado de su central y de su partido para detener su movilización. En Guanajuato los miembros de la CNC empujaron a dirigentes de otras organizaciones con mayor autonomía para encabezar el movimiento.

2. La representación campesina nacional a través del CAP ha logrado mayor unidad interna pero ha disminuido la calidad de sus propuestas y su poder de interlocución. Las respuestas de Zedillo al CAP en torno al Plan Nacional de Desarrollo fueron una muestra contundente. Las movilizaciones regionales, sin ser impulsadas desde el plano nacional por los integrantes del CAP fortalecieron su interlocución.

3. El apoliticismo de las organizaciones autónomas de los años ochenta, como estrategia para no confrontarse con los aparatos corporativos dominantes, las restringió en los hechos a la construcción económica. El desmantelamiento de sus empresas provocado por las reformas económicas les ha demostrado la necesidad de incidir en las políticas públicas. No basta ser eficiente en un marco macroeconómico adverso.

Organizando la comercialización. La disputa entre políticos y empresariales

Entre el 9 y el 11 de agosto las empresas comercializadoras campesinas realizaron en Oaxtepec, Morelos, un taller de comercialización para preparar la próxima cosecha al que asistieron alrededor de 90 organizaciones comercializadoras campesinas y la mayoría de instituciones vinculadas a la producción y comercialización agropecuaria.

El 8 de septiembre, en la Ciudad de México, se constituyó formalmente la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo integrada por 191 empresas comercializadoras de maíz, frijol, trigo y sorgo, y 15 empresas integradoras regionales, ubicadas en 18 entidades de la República. Dos tendencias contrarias se expresaron en su formación. Una minoritaria, de orientación netamente empresarial, que proponía formar una empresa comercializadora nacional que comprara y vendiera de manera centralizada los productos de sus socios. La posición hegemónica planteó apoyar el fortalecimiento comercial, los procesos organizativos y las propuestas de política de cada empresa regional sin suplantarla.

De nueva cuenta se expresó la discusión que ha estado presente en todas los aparatos económicos de las organizaciones. Perseguir como único objetivo la rentabilidad de la empresa, separa a la organización económica de los procesos organizativos y políticos. Las empresas actúan como un intermediario más, utilizando en forma promocional el número de productores supuestamente beneficiados.

Pierden su capacidad de movilización pues sus bases no sienten que les pertenezca y a pesar de su eficiencia empresarial, sucumben ante políticas públicas adversas o intereses económicos realmente fuertes. Las experiencias pasadas demuestran que la mayoría de las organizaciones económicas campesinas están en crisis o han desaparecido, llevándose con ellas, en varios casos, procesos de organización valiosos.

La posición hegemónica de la Asociación busca moverse en dos ejes: el fortalecimiento de los procesos organizativos de base y de representación de intereses gremiales y la consolidación comercial como un instrumento que permita a las organizaciones disputar los mercados.

En el marco de liberalización de la agricultura acordado en el TLC y ante la disminución de la intervención de Conasupo en la comercialización de productos básicos, el control de los mercados entra en disputa. Además de los intermediarios tradicionales la modernización ha generado nuevos actores comerciales. Maseca, Country, Gamesa, Anderson Clayton, vinculando financiamiento y comercialización se han adueñado de grandes segmentos, Cargiell y Continental, dos de las empresas comercializadoras más grandes del mundo, están ya al otro lado de la frontera esperando les abran la puerta. La Asociación pretende que los espacios que deja el Estado sean ocupados por los propios productores, integrando tanto el proceso de producción y el de comercialización, como formando economías de escala a partir de la integración horizontal de un buen número de organizaciones de productores. La democratización o concentración de los mercados es la disputa actual.